



JURÍDICA

Una Revista de la Universidad Autónoma de Guerrero

EDICIÓN 1 / 20 DE ENERO DE 2026

***Fragmentaciones al Estado Colombiano: Un
Ciclo de Violencia Ligado a las Fallas
Organizacionales y Económicas entre Grupos
Guerrilleros y Paramilitares.***



UAGro
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
GUERRERO

Maicol Stiven Vanegas Nieto*
Maestría en Ciencia Política
Universidad Autónoma de Guerrero
25507161@uagro.mx

INTRODUCCIÓN.

El enfrentamiento armado que persiste en Colombia es y será una de las coyunturas más complejas y difíciles de olvidar desde la óptica Latinoamericana. Debido a las diferencias estructurales, conflictos en los niveles sociales, políticos y económicos, así como la falta de presencia del Gobierno en extensas regiones del país.

Entre los involucrados que afectaron la violencia en los últimos años se encuentran los grupos paramilitares y las guerrillas, colectivos que surgieron supuestamente con objetivos distintos, pero que provocaron y aún siguen generando etapas de odio, zozobra, miedo, guerra y sufrimiento.

Las guerrillas nacieron bajo un pensamiento revolucionario que pretendía provocar un cambio social frente a una organización que consideraban excluyente, mientras que los grupos paramilitares aparecieron como una respuesta violenta. En un principio con la justificación de defender a sectores económicos y comunidades campesinas de la amenaza insurgente.

No obstante, ambos grupos fueron partícipes de crímenes inhumanos, desplazamientos forzados y control de economías ilícitas, lo que fortaleció un bucle de violencia que era complejo detener. Este escrito se realizará en el campo de la Cátedra de la Paz, cuya finalidad primordial es estudiar las causas y repercusiones de los combates, de cara a fomentar la

* Estudiante de la Maestría en Ciencia Política (MCP) del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados – Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO), México. Administrador de Empresas de la Universidad del Valle, Colombia. Becario SECHITI. Correo electrónico: 25507161@uagro.mx No. ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8828-7514>, número de WhatsApp: +5217471506876.



introspección y la obtención de conocimientos relacionados al arreglo y la edificación de una sociedad más justa.

Dado que al analizar cómo nació el odio y la venganza entre guerrilleros y paramilitares, y cuáles son los aspectos que aún los motivan a actuar, se pretende entender que la paz no depende solamente de la firma de acuerdos, sino de una transformación organizacional que remueva las circunstancias que provocan la violencia.

Finalmente, este entramado descriptivo discute los diferentes elementos ligados a la configuración criminal del conflicto entre guerrilleros y paramilitares. Además, destaca las fallas estructurales, organizacionales y económicas que fundamentan ambos grupos, desde la imposición de su pensamiento político e ideológico en las relaciones sociales de los sujetos. Las cuales han sido afectadas por numerosas crisis nacionales e internacionales de la sociedad.

Del mismo modo, introduce nociones proyectadas al olvido estatal de los gobiernos en turno, en atender problemas públicos centrales en la periferia colombiana. Las cuales han sido azotadas por la violencia, el desplazamiento forzado y la migración de las personas focalizadas en las zonas rurales, debido al debilitamiento del aparato institucional en el territorio.

Rememorando un contexto de violencia, represión, guerra y resistencia

El conflicto armado se dio en un ambiente marcado por discrepancias sociales, concentración de la tierra y fragilidad del Gobierno en áreas rurales. Las guerrillas surgieron en la década de 1960, impulsadas por doctrinas revolucionarias que buscaban transformar lo social. Su finalidad era la conquista del poder para fundar un sistema socialista que terminará con el rechazo y la pobreza.

Por otra parte, las tropas paramilitares surgieron al principio como autodefensas ilícitas de terratenientes y élites económicas que veían atemorizados sus intereses por los movimientos insurgentes. Esta aparición atendió a un proceso de privatización de la violencia en el que



sectores económicos respaldaron grupos armados privados para compensar la inexistencia del Estado y afrontar a la sublevación presente.

Eventualmente, estas organizaciones evolucionaron en grupos criminales con objetivos particulares¹. Al pasar el tiempo, estas autodefensas se reforzaron como colectivos armados con firme influencia del narcotráfico, dirigidas a atacar a la guerrilla a través de formas violentas y de vigilancia territorial.

Uno de los factores más decisivos en la ampliación del conflicto fue la lucha por territorios, las guerrillas pretendían tener control para que les permitieran acceso y movilidad a los cultivos ilícitos, en cambio los paramilitares buscaban evacuar a la insurgencia y asegurar influencia en actividades económicas ilícitas.

De acuerdo con el balance regional del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), estos enfrentamientos transformaron a las regiones, dado que, en casi 13 zonas estudiadas, se documentaron numerosos desplazamientos, declive social y la imposición de economías ilegales que reconfiguraron en su totalidad el control territorial². Es por eso por lo que, está competencia entre grupos hizo que muchas comunidades vivieran sometidas en la violencia y el miedo por la guerra constante que se vivía en aquel entonces.

El odio y sufrimiento se consolidaron dada la competencia por zonas estratégicas y economías fraudulentas como la cocaína, así como por las represalias mutuas que dejaron muchas víctimas, manteniendo un periodo de desagravio que se amplió por años. En el que se identificaron más de 200.000 muertos, miles de personas desaparecidas, gran cantidad de familias desplazadas, delitos como la violación y secuestro, entre otras desgracias que afectaron la vida de un sinnúmero de colombianos³.

Las ganancias obtenidas de estas economías ilegales consolidaron su capacidad armada y el financiamiento de actividades militares que persistieron en los combates. En efecto, un

¹ Patricio García, "Organizaciones armadas post Autodefensas Unidas de Colombia: del pasado contrainsurgente al presente de criminalidad transnacional, 2006-2016" (2020).

² Centro Nacional de Memoria Histórica, "Regiones y conflicto armado: balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico" (2018).

³ Natalio Cosoy, "¿Por qué empezó y qué pasó en la guerra de más de 50 años que desangró a Colombia?" (2016).



análisis de geografía del conflicto refleja que el país tiene el mayor cultivo de coca del mundo, y que el crecimiento de este, está asociado con territorios donde hay una gran presencia de paramilitares, lo que evidencia que el tema del narcotráfico no es externo, sino estructural al conflicto⁴.

En este contexto, la economía durante el conflicto fue un estímulo macabro que hizo que la lucha perdiera motivación en el ámbito político y se enfocará en operaciones criminales. La lucha armada, los asesinatos y masacres se convirtieron en modos recurrentes para transmitir temor y fortalecer el control territorial. Las comunidades más afectadas fueron los campesinos, indígenas y afrodescendientes, dado que muchos pensaban que estos colaboraban con algunas de las fuerzas armadas.

Además de los traslados, el conflicto ocasionó violaciones a los derechos humanos, como la incorporación forzada de menores, violencia sexual, secuestros y desaparecimiento forzado. Estos sucesos no sólo fragmentaron el tejido social, sino que dejaron efectos emocionales en muchas familias. Adicional, la expropiación de tierras que favoreció a sistemas de narcotráfico y sectores económicos asociados con los grupos paramilitares, lo que aumentó la desigualdad y fortaleció organizaciones de poder ilícitas en muchas regiones de Colombia.

Los grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), fueron motivados por un enfoque político que buscaba eliminar la desigualdad social a través de combates armados. Las FARC se protegieron en varias zonas y en diversos momentos de su historia acudieron al tráfico de estupefacientes para respaldar sus recursos, y fue nombrada por los Estados Unidos y la Unión Europea como organización terrorista⁵.

No obstante, al paso de los años, sus alicientes convicciones se combinaron con preferencias económicas derivadas del narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Aunque

⁴ Ana María Díaz y Fabio Sánchez, "Geografía de los cultivos ilícitos y conflicto armado en Colombia" (2004).

⁵ Germán Padinger, "Historia de las FARC en Colombia: del conflicto hasta la desmovilización y la disidencia" (2022).



actualmente muchos grupos se desmovilizaron, insisten disidencias que se mantienen por motivos económicos y de control territorial.

Por su parte, los paramilitares fueron motivados por la necesidad de preservar los intereses económicos de terratenientes y narcotraficantes. Al inicio, su narrativa se enfocó en “abogar” por el campesinado y la nación del comunismo, pero realmente fortalecieron organizaciones criminales que se nutrieron mediante la violencia, el desalojo de tierras y actos ilícitos.

A lo largo de los años, el Gobierno colombiano aplicó diversas tácticas para acabar con las masacres, integrando negociaciones de paz y procesos de desmovilización. En el caso de las guerrillas, el acuerdo firmado en el año 2016 e incluso desde antes del 2006, las tropas paramilitares buscaron reintegrarse a la vida civil a través de la desmovilización de más de 29.000 miembros, sin acuerdos políticos⁶.

Pese a estos avances no tuvieron tal éxito pues la aplicación ha sido muy pausada y muchos de sus integrantes se reestructuraron en fuerzas armadas ilegales, conocidos como “bandas criminales” que siguen actuando bajo doctrinas parecidas y no se acogieron a lo pactado. Estas bandas sostienen control económico ilegal y continúan afectando la seguridad en muchos territorios de Colombia. Esto revela que la paz requiere cambios estructurales y concientización, no simplemente la desmovilización de grupos armados.

En la actualidad, ambas agrupaciones, aunque transformadas, continúan impulsadas por el control económico y territorial, sosteniendo un efecto negativo en la seguridad, confianza y edificación de paz. Esto manifiesta que la base del conflicto no se reduce a corrientes de pensamiento, sino a la estabilidad de organizaciones ilegales enriquecidas por la desigualdad y el olvido estatal.

Los combates entre grupos armados no se pueden entender sin saber los antecedentes históricos que funcionaron como cimiento para su origen. Gran parte del siglo XX, el país atravesó muchas disonancias sociales, generando inestabilidad y protestas. Las guerrillas,

⁶ Conciliation Resources, “Historia del conflicto colombiano” (2016).



se inspiraron en movimientos revolucionarios marxistas presentados en otros países de Latinoamérica.

Por otro lado, los grupos paramilitares nacieron como una oposición de las élites económicas y terratenientes que se sentían en riesgo por el progreso de las guerrillas, estos colectivos fueron constituidos con la justificación de ofrecer protección, pero comenzaron a operar por fuera de la ley.

El conflicto entre guerrilleros y paramilitares dejó repercusiones humanitarias, además de efectos negativos a nivel económico. Por mucho tiempo, muchas regiones del país quedaron estancadas en la pobreza y abandono por parte del Estado. El sector agrícola estuvo mayormente perjudicado, debido a que muchos campesinos fueron presionados a huir de sus tierras provocando desabastecimiento de alimentos.

Asimismo, las prácticas de extorsión a comerciantes y transportadores eran visibles impidiendo el progreso económico y aumentando el clima de desconfianza que alejó las oportunidades de inversión y detuvo el avance de las regiones.

En contraste con lo anterior, aunque la gravedad del daño fue importante, emergieron mecanismos de resistencia y gestión comunitaria que aumentaron la capacidad de los individuos en ser resilientes y comprometidos con el pueblo. La cantidad de víctimas, grupos de mujeres y redes campesinas han encabezado propuestas para la protección de los derechos humanos, la búsqueda de la verdad y el arreglo integral.

Estas vivencias proporcionan un aprendizaje primordial: la edificación de paz no se reduce a acuerdos sino a la participación ciudadana de personas que experimentaron la guerra. El reconocer el sufrimiento, el temor, la justicia y la verdad para mantener cualquier iniciativa de reconciliación a futuro. Actualmente, uno de los principales retos para mejorar la paz en el país es asegurar que el gobierno esté presente en las zonas que históricamente fueron abandonadas y afectadas por el conflicto, así como aplicar políticas públicas para fomentar el crecimiento económico y social.



Por su parte, el ajuste integral de las víctimas y el acceso a la justicia que debe incorporar el sistema debe garantizar los elementos constitutivos de la justicia transicional, tales como, la verdad, la reparación de las víctimas, la reconciliación y las garantías de la no repetición.

De la misma manera, es primordial acabar con esas economías ilícitas que se mantienen financiadas por medio de los secuestros, masacres y conflictos en general. Asimismo, definir métodos para defender a líderes sociales y defensores del pueblo, quienes han sido foco de agresiones en los últimos años.

Desde la perspectiva jurídica del conflicto armado en Colombia se requiere estudiar la forma en que el Estado ha coordinado métodos de responsabilidad y restauración frente a violaciones masivas de derechos humanos. La justicia transicional, creada para atender escenarios de violencia permanente, une medidas judiciales con herramientas de reparación enfocados a las víctimas.

A partir del Acuerdo de Paz, la justicia transicional en Colombia busca inculpar los crímenes de la conflagración a través de procedimientos que combinan sanción, verdad y restauración, presentando una perspectiva total para vencer la violencia estructural⁷.

En este contexto, la Jurisdicción Especial para la Paz se convirtió en una base judicial del proceso, al estudiar comportamientos cometidos por todos los grupos armados bajo criterios de verdad plena y penalidades propias orientadas a la restauración. El incremento de casos de niñas, niños y adolescentes reclutados por grupos paramilitares demuestra la amenaza permanente en territorios rurales donde la presencia estatal es reducida.

Los afectados, principalmente como los indígenas o afrodescendientes, enfrentan debilidades diversas que agudizan el impacto humanitario del conflicto⁸. Este sistema pretende equiparar el deber estatal de sanción con la necesidad de reparar la confianza institucional.

⁷ Jaime Cubides Cárdenas, Paola Alexandra Sierra Zamora y Jean Carlo Mejía Azuero, “Reflexiones en torno a la justicia transicional en Colombia: Fuerzas Armadas, víctimas y posacuerdo” (2018).

⁸ Naciones Unidas Colombia, “Atrapados en las redes del conflicto: aumento del reclutamiento de niñas y niños en Colombia” (2025).



Sin embargo, su eficacia está sujeta a aspectos externos como la continuidad de paramilitares, la debilidad institucional en zonas periféricas y los obstáculos para asegurar que los afectados se involucren en los procesos de verdad y reconocimiento.

A pesar de que el Acuerdo de Paz fue un gran adelanto para el país, el escenario actual refleja que las dinámicas del conflicto armado siguen impactando en gran manera a muchas regiones. En distintas zonas continúan estructuras armadas que se enfrentan por el control de economías ilegales y rutas estratégicas, lo cual provoca un entorno continuo de riesgos para comunidades rurales.

Este panorama se evidencia en el incremento de desplazamientos, confinamientos y asesinatos selectivos, principalmente contra representantes sociales y defensores de derechos humanos que promueven procesos de restitución de tierras o conservación ambiental. De acuerdo con los datos recogidos por INDEPAZ, han sido más de 390 líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de acuerdos asesinados entre los años 2024 y 2025⁹.

La fragilidad institucional en territorios aledaños impide la acción estatal y permite que estos grupos se enmarquen en prácticas de reclutamiento, extorsión y regulación de la vida comunitaria, lo que intensifica la vulnerabilidad de grupos indígenas, afrodescendientes y campesinos.

Más aún, cuando las plataformas digitales actuales son un medio para reclutar a menores de edad a los grupos armados, en donde son contactados e interactúan con estos, a través de TikTok y Facebook, fomentando la violencia y brindando supuestos beneficios. Entre los años 2022 y 2025 se identificaron varios casos, impactando a niños y niñas indígenas, afrodescendientes primordialmente por las diferentes tipificaciones de la violencia de género¹⁰

⁹ Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, “Líderes sociales, defensores de DD. HH. y firmantes del Acuerdo asesinados en 2024” (2025).

¹⁰ Noticias ONU, “Historia de la publicación” (2025).



Los desafíos que se presentan a nivel institucional continúan siendo amplios. La falta de presencia estatal completa reduce la capacidad de prevención, resolución y acceso a la justicia. Además, la ausencia de recursos para aplicar políticas de seguridad, desarrollo rural y restauración causa demoras y retrocesos al avance que ya habían propuesto.

En este contexto, es importante reforzar los modelos de protección, asegurar la participación de los afectados en el proceso decisorio y fortalecer los métodos de acompañamiento en la aplicación de políticas de paz. Frente a la continuidad de estos grupos armados y violaciones de derechos humanos, es fundamental reforzar la presencia total del Estado en las zonas a través de políticas de seguridad, justicia y progreso rural.

De igual manera, es importante coordinar instituciones nacionales y locales para garantizar la prevención del reclutamiento, la restauración integral y la vinculación de los afectados en el proceso decisorio público.

Al mismo tiempo, las políticas deben incluir garantías de no repetición que combatan la impunidad, refuercen procesos comunitarios, protejan el recuerdo histórico y fomenten investigación autónoma para reconstruir el tejido social¹¹. Sin estas recomendaciones, los adelantos jurídicos no lograrán cambios reales y sustanciales.

CONCLUSIONES.

El análisis de combates entre grupos armados en el país muestra que la violencia no fue resultado de un acontecimiento distante, sino la repercusión de una aglomeración histórica de diferencias sociales, exclusión política y falta de gobierno en las áreas rurales. El surgimiento de estos responde a la búsqueda de justicia social en escenarios donde extensos sectores de la sociedad no tenían oportunidades.

¹¹ INDEPAZ, “Plan nacional de garantías para la defensa de los derechos humanos en Colombia” (2013).



Sin embargo, el nacimiento de guerrilleros y paramilitares tampoco resolvió los conflictos organizacionales, sino que afianzo la violencia, ocasionando un ciclo de represalias y venganzas que afectaron negativamente a la población.

A lo largo de los años, las ideologías que fomentaron a estos grupos cambiaron sus preferencias económicas, relacionadas al narcotráfico y operaciones ilegales. Tanto guerrilleros como paramilitares encontraron en estas actividades ilícitas motivos de financiación que reforzó su capacidad y agrandó la guerra por décadas.

Esto revela que los enfrentamientos no sólo se justifican en pensamientos políticos, sino en sistemas criminales que se aprovecharon del caos y la falta de presencia de los Gobiernos nacionales. En conclusión, este análisis demuestra que edificar la paz en Colombia debe ser comprendida como un proceso global, que va más allá de la firma de acuerdos y composiciones normativas. Que involucra y propicia cambios en el marco social, económico y político, asegurando justicia, igualdad y arreglo para las víctimas. También, necesita la implicación de la sociedad civil en la reconciliación y generación de una cultura de paz que destruya sentimientos de odio y venganza que han dejado huella en la historia de Colombia.

REFERENCIAS.

Centro Nacional de Memoria Histórica. «Regiones y conflicto armado Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico.» Centro Nacional de Memoria



- Histórica. 2018. <https://centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/balances-jep/descargas/balance-regiones.pdf> (último acceso: 08 de Diciembre de 2025).
- Conciliation Resources. Conciliation Resources. Noviembre de 2016. <https://www.c-r.org/es/resource/historia-el-conflicto-colombiano> (último acceso: 08 de Diciembre de 2025).
- Cosoy, Natalio. «¿Por qué empezó y qué pasó en la guerra de más de 50 años que desangró a Colombia?» BBC Mundo, 24 de Agosto de 2016: 1.
- Cubides Cárdenas, Jaime, Paola Alexandra Sierra Zamora, y Jean Carlo Mejía Azuero. «Reflexiones en torno a la Justicia Transicional en Colombia: Fuerzas Armadas, víctimas y posacuerdo.» Utopía y Praxis Latinoamericana, 2018: 11-24.
- Díaz, Ana María, y Fabio Sánchez. «Geografía de los Cultivos Ilícitos y Conflicto Armado en Colombia*.,» Development Research Centre, DESTIN, LSE. 2004. <https://www.lse.ac.uk/international-development/Assets/Documents/PDFs/csrc-working-papers-phase-one/wp47sp-geografia-de-los-cultivos-ilicitos.pdf> (último acceso: 08 de Diciembre de 2025).
- García, Patricio. «Organizaciones armadas post Autodefensas Unidas de Colombia: Del pasado contrainsurgente al presente de criminalidad transnacional. 2006-2016.» Izquierdas, 2020: 141-158.
- INDEPAZ. «Plan nacional de garantías para la defensa de los derechos humanos en Colombia.» INDEPAZ. 2013. <https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/09/Plan-Nacional-de-Garant%C3%ADas-para-la-defensa-de-los-DH-PROPUESTA-DEFENSORES-Y-DEFENSORAS-2013.pdf> (último acceso: 08 de Diciembre de 2025).
- Naciones Unidas Colombia. Naciones Unidas Colombia. 27 de Junio de 2025. <https://colombia.un.org/es/297053-atrapados-en-las-redes-del-conflicto-aumento-del-reclutamiento-de-ni%C3%B1as-y-ni%C3%B1os-en-colombia> (último acceso: 08 de Diciembre de 2025).



Noticias ONU. Noticias ONU. 27 de Junio de 2025.

<https://news.un.org/es/story/2025/06/1539906> (último acceso: 08 de Diciembre de 2025).

Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz. Indepaz. 19 de OCTUBRE de 2025. <https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2024/> (último acceso: 08 de Diciembre de 2025).

Padinger, Germán. «Historia de las FARC en Colombia: del conflicto hasta la desmovilización y la disidencia.» CNN Español, 28 de Junio de 2022: 1.

